

Crisis financiera mundial y sociedades en apuros

Ignacio Ramonet

Ignacio Ramonet es director de *Le Monde Diplomatique* (París).

El presente texto tiene su origen en una conferencia pronunciada en la sede de la Fundación Cañada Blanch, en Valencia.

El terremoto bursátil de Asia ha visto cómo su onda de choque golpeaba primero a Rusia y luego llegaba a América Latina. Desde entonces amenaza al resto del mundo. La crisis financiera que empezó en Tailandia hace dieciséis meses se ha transformado en una crisis económica y social de grandísima amplitud, que alcanza a la población de casi todos los países emergentes. Afecta de un modo duradero al crecimiento mundial, cuyas previsiones se han reducido a la mitad, del 4% al 2% para 1998.

Está comprobado que un mercado financiero mundializado, sin límites ni control, puede precipitar en el caos, en un plazo muy breve, la vida económica de media humanidad y, de rebote, al planeta entero. La mundialización –cuyo motor principal es la optimización a escala planetaria del capital financiero– está poniendo a las mujeres, a los hombres y a los niños del mundo en un estado de inseguridad generalizada. Soslaya y rebaja a las naciones y sus Estados en tanto que lugares pertinentes del ejercicio de la democracia y garantes del bien común.

El fin de los controles de cambios, la posibilidad que se ofrece a las multinacionales de prestar su excedente de tesorería, el fin del ajuste del marco crediticio y del pilotaje de la masa monetaria mediante las tasas de interés han engendrado un excesivo crecimiento de los flujos de capital y han acelerado de una manera irracional la globalización financiera.

La idea ultraliberal según la cual los mercados son, a la larga, el instrumento del mejor reparto de los recursos para un desarrollo humano armonioso parecía imponerse sin discusión desde hace quince años. La crisis financiera actual –primera crisis de la mundialización– ha venido a batirla en brecha espectacularmente. El dogma neoliberal es discutido más que nunca por los economistas keynesianos, que siguen reivindicando para el Estado un papel clave.

La mundialización financiera ha creado su propio Estado. Un Estado supranacional, que dispone de sus instituciones, sus aparatos, sus redes de influencia y sus medios de acción propios. Se trata de la constelación formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas instituciones hablan con una sola voz –reflejada por la casi totalidad de los grandes medios de comunicación de masas– para exaltar las «virtudes del mercado».

Como sucesora del GATT, la OMC se ha convertido así, a partir de 1994, en un órgano supranacional situado fuera del control de la democracia parlamentaria; ante una querrela, esta organización puede declarar las legislaciones nacionales, en materia, por ejemplo, de derecho laboral, de medio ambiente o de salud pública, «contrarias a la libertad de comercio» y pedir su abrogación.

Por otra parte, desde mayo de 1995, en el seno de la OCDE y a espaldas de las opiniones públicas, se negociaba el importantísimo Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) encaminado a reforzar la mundialización financiera, con todas las desastrosas consecuencias que ello habría tenido para los ciudadanos, y cuya firma estaba prevista para octubre de 1998. Solamente gracias a una formidable movilización de numerosas asociaciones cívicas, sobre todo en Norteamérica y en Europa Occidental, se pudo diferir, siquiera provisionalmente, la firma de este acuerdo.

El desarme del poder financiero viene a ser una tarea cívica de primer orden si se quiere evitar que el mundo del siglo que viene se transforme definitivamente en una jungla donde los predadores dicten la ley.

Sabemos que la crisis financiera actual empezó en el Este de Asia a causa de una liberalización radical de los sistemas financieros, impulsada durante mucho tiempo por el Banco Mundial y el FMI. En particular, en los tres países –Tailandia, Corea del Sur e Indonesia– situados actualmente bajo la tutela del FMI. «La crisis –reconoce ahora el economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz– no habría llegado si no hubiera habido una liberalización de las operaciones de capital en esas economías».

Diariamente, cerca de 1,8 billones de dólares hacen múltiples idas y venidas por los mercados de cambios, especulando sobre las variaciones de las paridades de las divisas. Esta inestabilidad de los cambios es una de las principales causas de las variaciones de las tasas de interés reales (aparte la inflación). Esto frena el consumo de las familias y las inversiones de las empresas. Ahonda los déficits públicos. Incita a los fondos de pensiones a exigir de las empresas dividendos cada vez más elevados, desencadenando así una mecánica infernal que amenaza a todo el edificio financiero internacional. «La crisis financiera en que se sumerge el mundo –explica Jean-Michel Quatrepoint– se puede resumir en una ecuación imposible: no se pueden exigir tasas de retorno sobre inversiones del 20 o el 25% al año, con una economía mundial que crece alrededor del 3 o el 4%, y unas tasas de interés reales a largo plazo (aparte la inflación) apenas superior al 2%. El crac viene de la confrontación de estas tres cifras».

Y lo que teme ahora el economista John Kenneth Galbraith es la recesión: «Lo que aprendimos de la crisis de 1929 –recuerda– es que el crac tiene efectos adicionales. Todos aquellos que de repente se han vuelto pobres o menos ricos reducen sus compras, y las empresas limitan sus inversiones. Entonces sobreviene la recesión o depresión».

A partir de ahí, las llamadas a una mayor reglamentación –consideradas poco antes como blasfematorias– se multiplican. Los jefes de estado y de gobierno de los siete mayores potencias financieras (G7) se han pronunciado recientemente a favor de un refuerzo de los medios del FMI, el cual desean reformar, y en pro de la definición de nuevas reglas de control financiero. También hemos visto, estas últimas semanas, a los muy ortodoxos diarios económicos *Financial Times* y *The Wall Street Journal* reclamar, explícitamente, el «control de los movimientos de capital», que «podría ser, en ciertos casos y en determinadas condiciones, una de las soluciones menos malas».

Se multiplican espectaculares mudanzas del pensamiento económico dominante, como constata el economista americano Paul Krugman: «Se está dando actualmente un cambio de punto de vista radical entre los economistas ilustrados, quienes consideran que es jugar con fuego ir hacia una liberalización completa de los pequeños capitales en las economías emergentes.» Pero eso deja escéptico al Sr. Rubens Recupero, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCD): «Me pregunto –dice– si hemos llegado ya al punto de poder emprender una reforma en profundidad del sistema. Dados los intereses en juego, las reformas no son posibles más que en situaciones como el final de una guerra o una crisis muy grave. Ahora bien, las economías americana y europea no han sido apenas tocadas hasta ahora, lo que mantiene la ilusión de podernos contentar con medidas a medias».

Entre esas medidas, algunos citan las que ha adoptado Chile desde el retorno a la democracia en 1991. Para controlar la volatilidad de los flujos de capital a corto plazo, Chile ha tomado dos medidas: por una parte, un depósito del 30% del monto total del capital importado se tiene que confiar al Banco central, por un período de un año, en una cuenta no remunerada. Por otra parte, todas

las inversiones directas e indirectas tienen que permanecer como mínimo un año en el país. Estas obligaciones impuestas a los inversores han permitido a Chile evitar el choque de rechazo que acaban de sufrir, por ejemplo, Brasil, Venezuela o Argentina, ¡y no le han impedido conocer, durante los diez últimos años, un crecimiento medio anual del PIB del 7,9%!

Pero la gravedad de la situación exige, sin duda, medidas más radicales a escala planetaria. Hay que limitar los perjuicios provocados por la irracional exuberancia de los movimientos de capital. De tres maneras: supresión de los «paraísos fiscales», aumento de la fiscalidad de las rentas del capital y gravamen de las transacciones financieras.

Los «paraísos fiscales» son otras tantas zonas donde reina el secreto bancario, que no sirve más que para camuflar malversaciones, para el reciclado del dinero proveniente del tráfico de drogas, de actividades mafiosas, de la evasión fiscal, de las comisiones ocultas, etc. Centenas de millares de millones de dólares se sustraen así a toda fiscalidad, en beneficio de los poderosos y de las empresas financieras. Pues todos los grandes bancos del planeta tienen sucursales en los paraísos fiscales y obtienen de ellos grandes beneficios. ¿Por qué no decretar un boicot financiero mediante la prohibición de abrir filiales allí a los bancos que trabajan con los poderes públicos?

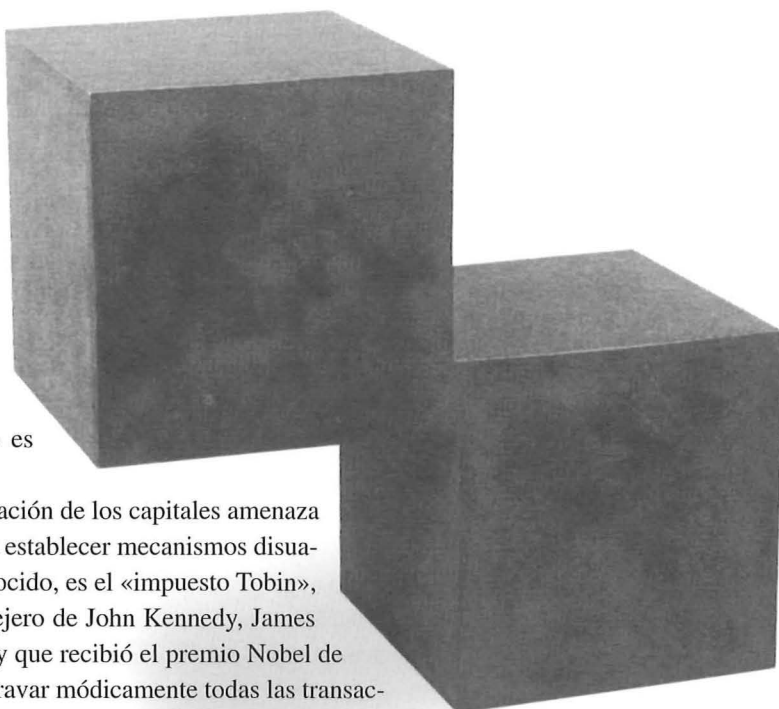
El gravamen de las rentas financieras es una exigencia democrática mínima. Esas rentas deberían estar gravadas exactamente con la misma tasa que las rentas del trabajo. No es este el caso en ninguna parte.

La libertad total de circulación de los capitales amenaza la democracia. Por eso conviene establecer mecanismos disuasorios. Uno de ellos, el más conocido, es el «impuesto Tobin», por el nombre del antiguo consejero de John Kennedy, James Tobin, que lo propuso en 1972, y que recibió el premio Nobel de economía en 1981. Se trata de gravar módicamente todas las transacciones en los mercados de cambios para estabilizarlos y proporcionar unos ingresos a la comunidad internacional.

Recientemente se ha constituido una asociación –Action pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens (ATTAC)– que se propone actuar como un formidable grupo de presión cívica cerca de los gobiernos, para empujarlos a reclamar, entre otras cosas, la efectiva puesta en práctica de ese impuesto mundial de solidaridad.

Numerosos expertos han demostrado que la puesta en práctica de este impuesto no presenta ninguna dificultad técnica. Con una tasa del 0,1% sobre las transacciones en los mercados de cambios, el impuesto Tobin generaría ¡unos 180.000 millones de dólares! Dos veces más que la cantidad anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en el mundo en cinco años.

Ahora bien, ésta no cesa de extenderse. Sabíamos que el foso de las desigualdades se había hecho más hondo durante los dos decenios ultraliberales (1979-1998), pero ¿cómo imaginar que



llegaría a serlo tanto? Pues vemos que si «en 1960, el 20% de la población mundial que vive en los países más ricos tenía una renta 30 veces superior a la del 20% más pobre. En 1995, ¡su renta era 82 veces superior!» En más de 70 países, la renta por habitante es inferior a la de hace veinte años... A escala planetaria, cerca de 3.000 millones de personas –la mitad de la humanidad– viven con menos de 2 dólares al día...

La abundancia de bienes alcanza niveles sin precedentes, pero el número de los que no tienen techo, trabajo ni bastante para comer aumenta sin cesar. Así, de los 4.500 millones de habitantes de los países en vías de desarrollo, cerca de un tercio no tienen acceso al agua potable. La quinta parte de los niños no ingieren suficientes calorías o proteínas. Y unos 2.000 millones de individuos –la tercera parte de la humanidad– sufren anemia.

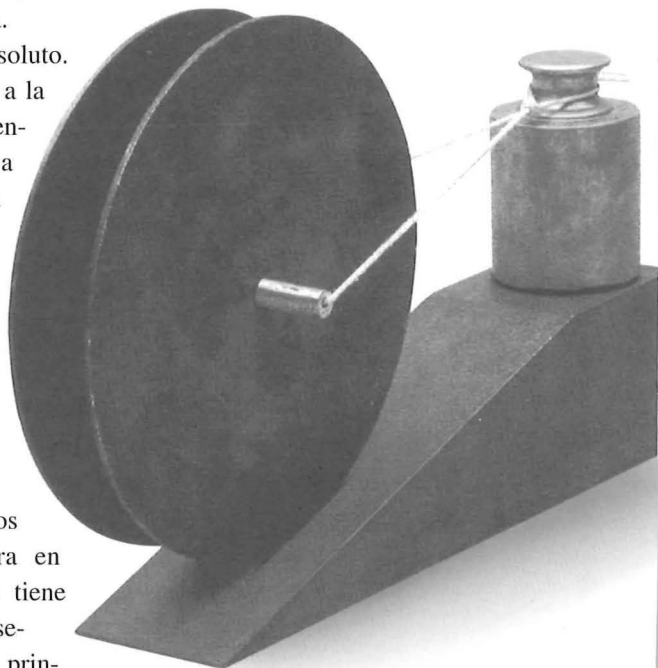
¿Es fatal esta situación? No, en absoluto. Según las Naciones Unidas, para dar acceso a la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, agua potable, educación y sanidad) a toda la población del globo, bastaría con deducir, de las 225 mayores fortunas del mundo, menos del 4% de la riqueza acaparada. Llegar a la satisfacción de las necesidades sanitarias y nutricionales no costaría más que 13.000 millones de dólares, es decir, apenas lo que los habitantes de los Estados Unidos y de la Unión Europea gastan al año en el consumo de perfumes...

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 50 aniversario se celebra en diciembre próximo, afirma: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para asegurar su salud, su bienestar, y el de su familia, principalmente en cuanto a la alimentación, el vestido, la vivienda y los cuidados médicos, como también en cuanto a los servicios sociales necesarios». Pero esos derechos son, a los ojos de gran parte de la humanidad, cada vez más inaccesibles.

Tomemos, por ejemplo, el derecho a la alimentación. Alimentos no faltan. Los productos alimenticios nunca han sido tan abundantes, y las disponibilidades deberían permitir a cada uno de los 6.000 millones de habitantes del planeta disponer de al menos 2.700 calorías diarias. Pero no basta con producir alimentos. Hace falta también que puedan ser comprados y consumidos por los grupos humanos que los necesitan. Lo que no es el caso, ni mucho menos. Cada año mueren de hambre 30 millones de personas. Y 800 millones sufren de subalimentación crónica.

También hemos visto reaparecer, un poco por todas partes, la mendicidad, los comedores de beneficencia y –prueba suplementaria de la deshumanización que provoca, en este fin de siglo, la mundialización financiera– la figura social del trabajador infantil.

Ya en el siglo XIX, en la época del liberalismo triunfante y del auge industrial, la agravación de las desigualdades y el «infierno» obrero se reflejaban particularmente en la explotación de los niños, cuyo empleo, sin límite de edad, se había generalizado. Describiendo, en 1840, en un célebre informe, el estado físico y moral de los trabajadores infantiles en Francia, donde la duración de la jornada de trabajo era entonces de 14 horas, Louis Villermé evocaba «esa multitud de niños,



algunos de los cuales tienen apenas siete años, flacos, macilentos, cubiertos de harapos, que van a las fábricas con los pies descalzos, bajo la lluvia y por el barro, pálidos, abatidos, con un aspecto exterior de miseria, dolor y desaliento».

Lejos de espantarse por una descripción así –de algo que novelistas como Charles Dickens, Victor Hugo, Hector Malot, Jules Vallés, Émile Zola y Edmondo de Amicis habían denunciado también–, algunos liberales lo consideraban como un «mal necesario»: «Esa miseria –escribe uno de ellos– ofrece un saludable espectáculo a toda una parte que permanece sana de las clases menos felices; sirve para llenarlas de horror; las exhorta a las virtudes difíciles que necesitan para llegar a una condición mejor».

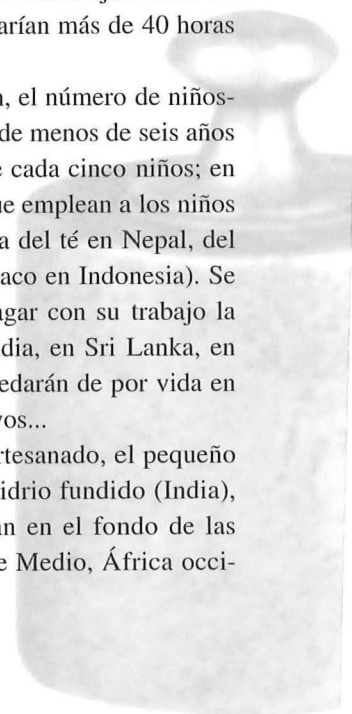
Ante tal cinismo, ¿cómo no comprender la irritación, por ejemplo, de Karl Marx, que en su Manifiesto del Partido Comunista, en 1848, denunciará a «la gran industria que destruye todo vínculo familiar en el proletario y convierte a los niños en simples instrumentos de trabajo», y reclamará la «abolición del trabajo de los niños en las fábricas tal como se practica hoy»?

La historia ha demostrado que la abolición progresiva del trabajo infantil y la instauración de la enseñanza obligatoria han sido, en Europa y en América del Norte, las condiciones indispensables para el desarrollo económico y social. Sin embargo, ha habido que esperar a 1990 para que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente todos los Estados del mundo en el marco de la ONU, entre en vigor y fije, tal como deseaba la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) desde 1973, una edad mínima de entrada en el mundo del trabajo.

A pesar de ello, se calcula que alrededor de 250 millones de niños trabajan, de los cuales los más jóvenes tienen menos de cinco años... Si bien la mayor parte de ellos se encuentran en los países pobres del Sur, muchos son explotados en los Estados del Norte, en particular en los Estados Unidos. En el conjunto de la Unión Europea, por ejemplo, el número de niños de menos de 15 años que están trabajando superaría actualmente los dos millones... En particular en las zonas más violentamente azotadas por las reestructuraciones ultraliberales, como el Reino Unido, donde los niños-trabajadores son particularmente abundantes en los suburbios más pobres. Pero incluso en países considerados como «socialmente avanzados» –Dinamarca, Países Bajos– ha reaparecido el fenómeno del niño en el trabajo. «También en Francia –afirma una experta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)– varias decenas de millares de niños ejercerían un empleo asalariado so capa de aprendizaje, y el 59% de los aprendices trabajarían más de 40 horas semanales, a veces hasta 60».

A escala planetaria, como consecuencia vergonzosa de la globalización, el número de niños-trabajadores no cesa de crecer. En algunos países es un azote en masa; niños de menos de seis años son explotados por decenas de millones. ¡En América Latina trabaja uno de cada cinco niños; en África, uno de cada tres; en Asia, uno de cada dos! El primer sector de los que emplean a los niños en esas regiones es la agricultura (plantaciones de azúcar en Brasil, cosecha del té en Nepal, del algodón en Zimbabue, del jasmín en Egipto, de la pita en Tanzania, del tabaco en Indonesia). Se practica allí a menudo la servidumbre por deudas: los niños tienen que pagar con su trabajo la deuda contraída por sus padres o sus abuelos. Esclavos de hecho (en la India, en Sri Lanka, en Mauritania, en el Perú), esos niños no saldrán jamás de su condición, se quedarán de por vida en las plantaciones, allí se casarán y de ellos nacerán de nuevo pequeños esclavos...

Gran cantidad de niños son empleados en la economía informal, el artesanado, el pequeño comercio, la mendicidad. Muchas actividades son peligrosas: manipulan vidrio fundido (India), se dejan los ojos tejiendo tapices (Marruecos, Nepal, Pakistán), se agotan en el fondo de las minas (Colombia, Suráfrica, Zaire). El trabajo doméstico (Magreb, Oriente Medio, África occi-



dental, América Latina) es de los más perniciosos, estando sometido el niño a todas las humillaciones y violencias, sobre todo las sexuales.

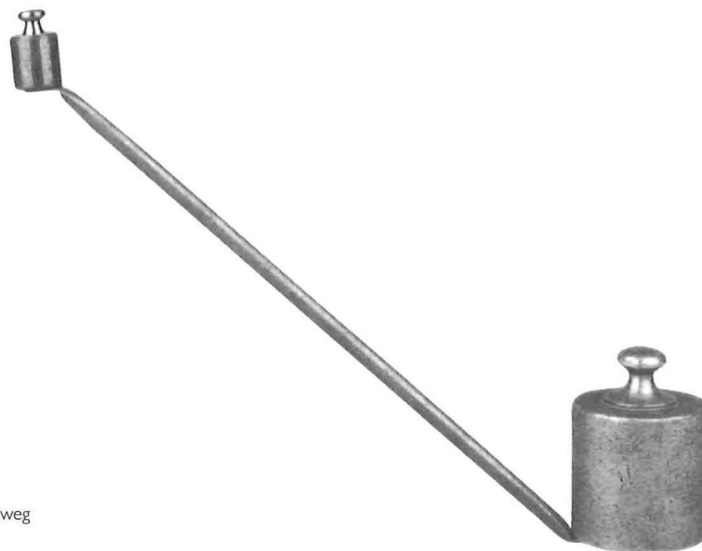
En ciertos países, los niños son muy buscados por las industrias relacionadas con la exportación hacia los países del Norte (sector textil en Bangladesh, fabricación de artículos deportivos en Paquistán, industrias del mueble en las Filipinas), porque esas empresas buscan mano de obra barata, dócil y no sindicada.

La primera causa del trabajo de los niños es la pobreza, una pobreza que la mundialización económica generaliza y agrava. De los 6.000 millones de habitantes con que cuenta el planeta, 5.000 millones son pobres. Partiendo de ese dato, cada vez más asociaciones se movilizan por todo el mundo, en torno al BIT y a la Unicef, para poner término a uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo.

A este respecto, el año pasado se celebró en Ginebra (Suiza) una marcha mundial contra el trabajo de los niños, el 4 de junio, para incitar a la Conferencia Mundial del Trabajo, que se desarrollaba en el marco del BIT, a adoptar una convención que proscribiera las formas más intolerables del trabajo infantil.

Pero se podrían imaginar también otras formas de acción. En particular, ¿por qué no imaginar un impuesto voluntario, con tasas muy leves –entre el 0,1 y el 0,5%– sobre el precio de cierto tipo de juguetes –por ejemplo, los juegos de vídeo– para constituir un fondo de ayuda a los niños desamparados? Los juegos de vídeo, por los que se chiflan todos los niños, sólo los compran las familias relativamente desahogadas del Norte y del Sur. Estos juegos son objeto de numerosas críticas por parte de padres y educadores. Las empresas que los producen –fundamentalmente Sega, Nintendo y Sony– podrían verse animadas a desembolsar voluntariamente ese impuesto. Sería para ellas un modo de responder a las críticas, y de adquirir la etiqueta de «empresa ética» invirtiendo una parte (muy pequeña) de sus ganancias en forma de donativos a la colectividad planetaria en pro de un mejor desarrollo humano.

Esa misma posibilidad de convertirse en una «empresa ética» se podría proponer a otros grandes industriales del juguete a cambio de que acepten desembolsar la TID (tasa para la infancia desamparada). ¿Y cómo podrían ellos no sumarse a un proyecto que busca restablecer el derecho sagrado de todo niño a una vida decente?



Juan Navarro Baldeweg
Dos pesos